



Nota: esta traducción está disponible gracias al aporte voluntario de Alejandra Erramuspe. El IGF le está agradecido.

Mensajes IGF 2020

INCLUSIÓN

P1. ¿Qué deben hacer las partes interesadas para desarrollar e implementar iniciativas y políticas sostenibles que fomenten la inclusión digital significativa para todos y eliminen la brecha digital en todas sus formas?

El acceso a Internet significativo e inclusivo debería ser un principio rector de todas las políticas e iniciativas dedicadas a eliminar la brecha digital. El acceso significativo significa que los usuarios tienen acceso a Internet constantemente, con suficientes datos, una conexión rápida y un dispositivo apropiado. También significa que los usuarios puedan acceder a contenidos y servicios (especialmente contenidos locales) que son relevantes para sus necesidades y realidades. Las políticas centradas en permitir dicho acceso deben estar ancladas en los contextos locales y responder a necesidades reales.

La pandemia COVID-19 ha puesto de relieve las desigualdades digitales y la necesidad de más acciones para garantizar el acceso universal, sin dejar a nadie atrás. Por lo tanto, acelerar el despliegue de infraestructura es urgente y los gobiernos deben alentarlo a través de marcos regulatorios más flexibles, innovadores y ágiles que promuevan tanto a las empresas de telecomunicaciones como a soluciones alternativas como son las redes comunitarias y los operadores rurales. Revisar los enfoques de los fondos de servicio universal, facilitar el acceso al espectro, simplificar la emisión de las autorizaciones necesarias para el despliegue de infraestructuras y garantizar la interconexión entre redes tradicionales y alternativas son ejemplos de lo que se podría hacer en este sentido.

Las **redes comunitarias** son facilitadores de una conectividad significativa y asequible. Se necesita la creación de capacidad técnica en las comunidades locales para garantizar que tengan las habilidades y el conocimiento para construir y operar infraestructuras seguras y sostenibles.

Los **recursos financieros** son clave para lograr la conectividad universal; más allá de los fondos gubernamentales y las inversiones del sector de las telecomunicaciones, la identificación de modelos de financiación innovadores merece más atención. La reducción de impuestos y precios de los equipos y dispositivos de infraestructura también podría hacer que el **acceso a Internet sea más asequible.**

Se necesitan políticas más sostenibles para eliminar la brecha digital que afecta a mujeres, niñas y personas con diversidad de género. Más allá de la conectividad, empoderarlos para crear contenido digital es esencial para construir una Internet más inclusiva. La lucha contra la violencia de género en línea también debe ser una prioridad. Son pilares fundamentales, marcos legales más sólidos y una mayor capacidad de ejecución, así como la acción sostenida de las plataformas en línea.

Las empresas de tecnología, las instituciones públicas y otras organizaciones deben garantizar que los productos, servicios y contenidos digitales respondan a las necesidades de **las personas con discapacidad**. Las acciones requeridas incluyen una aplicación más estricta de las regulaciones relacionadas con la accesibilidad, una mayor conciencia de la accesibilidad entre los expertos en tecnología y garantizar que las tecnologías digitales sean **accesibles por diseño**. También se necesitan marcos legales adecuados para abordar las barreras de propiedad intelectual y las fallas del mercado relacionadas con la **producción y distribución de contenido digital accesible**.

La promoción del multilingüismo y la diversidad cultural en línea requiere la movilización de más recursos institucionales y financieros. Los gobiernos, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro deben empoderar a las comunidades locales y los pueblos indígenas para producir contenido digital en sus idiomas, digitalizar su patrimonio cultural y administrar los derechos de propiedad intelectual asociados. La comunidad tecnológica también puede ayudar desarrollando tecnologías que permitan la inclusión digital de otros lenguajes (lenguajes orales, lenguas en peligro de extinción, etc.). Además, los gobiernos y las empresas de tecnología deberían ser más activos para permitir la aceptación universal (UA) de los nombres de dominio internacionalizados (IDNs) y las direcciones de correo electrónico dentro de sus servicios y tecnologías. Se necesita más concienciación y desarrollo de capacidades, tanto desde la oferta como de la demanda, para que las partes interesadas comprendan mejor los beneficios sociales y económicos a largo plazo de apoyar la preparación para la aceptación universal.

Se necesitan más inversiones (del sector público y privado) para desarrollar **habilidades digitales** en la ciudadanía. Más allá de adquirir habilidades técnicas, las personas deben estar capacitadas para ejercer el pensamiento crítico y utilizar la tecnología de manera segura y significativa para promover sus derechos.

Se requieren esfuerzos de colaboración para garantizar un **acceso equitativo al contenido digital** para la educación, la investigación, la cultura, el trabajo, etc. Las soluciones que se exploren más a fondo deben incluir modelos de acceso abierto, principios y prácticas de préstamos digitales controlados y abordar los desafíos en torno a los modelos de precios, acceso y distribución para libros electrónicos.

La educación en línea debe ser justa, inclusiva y de calidad. Los gobiernos, las instituciones educativas y el sector privado deben cooperar para garantizar un acceso significativo a Internet y al contenido educativo, pero también a entornos de aprendizaje en línea que tomen en cuenta las necesidades de todos los niños y estudiantes, incluidos los más vulnerables. La simple transposición del aprendizaje presencial a un entorno en línea no es suficiente; las escuelas y universidades deben diseñar enfoques innovadores para el aprendizaje y la enseñanza, y repensar los planes de estudio y los modelos pedagógicos. La creación de modelos para desarrollar las

capacidades digitales de los docentes es clave. Y también lo es garantizar la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños, niñas y estudiantes.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la **transformación digital** en todo el mundo. Los gobiernos y otras partes interesadas deben sacar provecho de esto y aprovechar aún más el potencial de las tecnologías digitales como facilitadores del desarrollo social y económico. La comunidad internacional tiene el deber de apoyar a los países en desarrollo en estos esfuerzos. Esto podría hacerse a través de instrumentos de desarrollo de capacidades que (1) ayuden a los países a crear regulaciones e instituciones para dirigir el desarrollo, despliegue y uso de tecnologías digitales que beneficien a la sociedad en general, y (2) empoderar a otras partes interesadas para que contribuyan a dichos procesos de gobernanza.

P2. ¿Qué políticas, regulaciones y estructuras de apoyo se necesitan para construir entornos propicios para economías digitales inclusivas que permitan que todos tengan acceso a sus beneficios tanto en países desarrollados como en desarrollo?

Es necesario hacer más para empoderar a las personas, especialmente en los países en desarrollo, para que se beneficien de la economía digital y estén preparadas para el futuro del trabajo. Los decisores de políticas deben desarrollar e implementar políticas y regulaciones ágiles y basadas en datos dedicadas a garantizar un acceso significativo a la infraestructura y la tecnología; reformar los sistemas educativos para centrarse más en las habilidades digitales y habilidades sociales blandas; y apoyar a la innovación y el espíritu empresarial.

Las **PYMEs** y los innovadores se beneficiarán del apoyo (de los gobiernos y de los actores más importantes) en sus esfuerzos por unirse al mercado digital. Las medidas pueden variar desde iniciativas de desarrollo de capacidades (centradas, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades comerciales de comercio electrónico) hasta la financiación inicial, incubadoras de empresas y entornos regulatorios limitados.

Los gobiernos y el sector privado deben abordar las desigualdades relacionadas con la participación de las mujeres, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables en la economía digital. Son ejemplos de acciones necesarias, eliminar las barreras para acceder a la economía digital y garantizar un trato equitativo para los trabajadores.

La armonización transfronteriza de determinadas políticas podría ayudar a acelerar el desarrollo de economías digitales más inclusivas y sostenibles. Las políticas centradas en eliminar las barreras al comercio digital transfronterizo y fomentar la competencia en el mercado son ejemplos a este respecto.

Acelerar la inclusión financiera y ampliar el acceso a pagos digitales rápidos, fiables y seguros puede apoyar el crecimiento económico inclusivo, impulsar el espíritu empresarial, reducir la economía informal y mejorar la vida de la ciudadanía. Los gobiernos deben trabajar junto con otras partes interesadas para construir infraestructuras adecuadas para los pagos digitales y fomentar su uso por parte de comerciantes y consumidores (a través del desarrollo de capacidades, incentivos fiscales, etc.).

Se requieren marcos legales para defender los derechos laborales en la economía digital y promover los principios del trabajo digno (pago justo, contratos justos, salarios justos, capacidad de colectivización). Estos marcos deberían **centrarse en proteger a las personas, no a los puestos de trabajo**, y deberían aplicarse de forma adecuada. Los códigos de buenas prácticas para el trabajo justo impulsados por el sector privado podrían ser una solución complementaria.

Q3. ¿Cómo podemos garantizar que los espacios y procesos de políticas que abordan los problemas de inclusión digital sean inclusivos y fomenten la participación activa y significativa de aquellas personas y comunidades cuyos problemas de inclusión digital se espera superar?

Para que las políticas de inclusión digital sean efectivas, eficientes y sostenibles, deben desarrollarse e implementarse con la **participación activa de las comunidades a las cuales están dirigidas** (jóvenes, mujeres, comunidades rurales, etc.). Las desigualdades digitales son diferentes, por lo que es importante contextualizar dichas políticas y adaptarlas a las necesidades de las comunidades a las cuales están dirigidas.

La inclusión no debe tratarse solo de espacios políticos, sino también de espacios tecnológicos. Éstos también deben integrar los puntos de vista e intereses de diversas comunidades, como por ejemplo, las mujeres y las personas con discapacidad. Por ejemplo, el sector privado debe considerar la inclusión de la discapacidad en todos los niveles de las organizaciones, comprender verdaderamente los desafíos y las necesidades de estas personas e involucrarlas en el diseño de tecnología y productos digitales.

Se requieren modelos más inclusivos, participativos e innovadores de gobernanza de Internet a nivel nacional e internacional. Una forma de impulsar una mayor participación en los procesos de gobernanza de Internet es conectarlos mejor con las realidades en el territorio. Es más probable que la ciudadanía y otras partes interesadas se involucren si comprenden de qué manera los problemas de gobernanza de Internet los afectan directamente.

Las distintas partes interesadas deben crear más oportunidades para una participación efectiva, sostenible y significativa de los jóvenes, las mujeres, las personas con diversidad de género y otros grupos subrepresentados en los espacios de gobernanza de Internet (incluidos los de toma de decisiones). Son elementos esenciales para ello, garantizar que estos espacios sean seguros, evitar el simbolismo, romper los silos y asignar más recursos (incluidos los financieros) a los programas de desarrollo de capacidades